

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 30/07/20Auto Interlocutorio No. 177**MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO**

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-003-2018-0121-01
DEMANDANTE:	JOHANNA MELGAREJO CASTILLO Y OTROS
DEMANDADO:	INPEC
ASUNTO	CONFIRMA AUTO QUE NEGÓ PRUEBAS

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto No. 975 del 09 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, a través del cual, negó el decretó de unas pruebas.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Johanna Melgarejo Castillo y otros demandaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y otros, por los daños materiales y morales sufridos por los demandantes como consecuencia de las lesiones padecidas por el señor Signey Monry Castillo cuando unos internos lo apuñalaron en hechos ocurridos el 31 de mayo de 2016.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 975 del 09 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali en audiencia inicial, se negó el decreto y práctica de unas pruebas solicitadas por el apoderado judicial de la parte demandante, bajo los siguientes argumentos:

"1.3 REMITIR al demandante SIGNEY MONROY CASTILLO a la JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, con el fin realice nuevamente valoración de su pérdida de capacidad laboral, teniendo en cuenta que por el hecho ha presentado otras patologías que han menoscabado su salud y así establecer la pérdida de capacidad laboral para la fecha actual.



"Se niega esta prueba de conformidad a lo normado en el artículo 226 inciso 2º del CGP, el cual preceptúa que "sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito".

En consecuencia, ya existe un dictamen pericial realizado por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, que se encuentra en firme, este despacho de se abstiene de decretar otro".

"(...)

"1.4 TESTIMONIOS

El Despacho se abstiene de decretar los testimonios de los demandantes SIGNEY MONROY CASTILLO e IRMA LORENA MENDOZA, los cuales deben ser interrogados por la contraparte y no como testigos.

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra el auto No. 975 del 09 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, argumentado (min:14:31:10):

"...ya que con la calificación que presentamos se le presentaron otros inconvenientes y subió la calificación, inclusive tengo una nueva calificación que ya no tiene el 25% sino que subió al 41%, por eso me pareció importante hacer una nueva calificación, porque inclusive en el nuevo proceso le instalaron marcapaso y obviamente eso subió la calificación, tan es así que ya tenemos la nueva calificación".

El apoderado judicial de la parte demandante manifestó que el dictamen pericial que pretende sea tenido en cuenta, fue allegado con posterioridad a la presentación de la demanda, ya que la entidad competente se demoró en emitirlo, por tal razón, el agregado al expediente se hizo de forma particular, sin embargo, solicitó que el nuevo dictamen fuera tenido en cuenta pues aumentó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Signey Monry Castillo.

Igualmente interpuso recurso frente a la negación en el decreto y práctica de la prueba testimonial de la señora Irma Lorena Mendoza ya que, estuvo en todo el proceso médico que se adelantó al señor Signey Monry Castillo, pues desde el momento en que tuvo el accidente hasta la presentación de la demanda tuvo unas patologías y el testigo solicitado conoce de las mismas.

Al respecto el Juzgado recuerda la imposibilidad legal que tiene de decretar la práctica dos dictámenes periciales sobre un mismo hecho, y argumentó la imposibilidad de adjuntar el allegado en la audiencia inicial por expresa prohibición del CPACA que dispone los momentos procesales en que pueden ser allegadas las piezas procesales.



V. CONSIDERACIONES:

5.1 Competencia

De conformidad con el artículo 243 del CPACA, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.”

5.2 Problema Jurídico

Corresponde a este Despacho determinar:

1.- Sí hay lugar a decretar el dictamen pericial solicitado por el apoderado judicial de la parte demandante de remitir al señor Signey Monroy Castillo a la Junta Regional de Invalidez, pues teniendo cuenta el numeral 2º del artículo 226 del CGP, sobre un mismo hecho sólo se puede presentar un dictamen pericial, y en la audiencia inicial el a quo incorporó y dio trámite a los dictámenes periciales elaborados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense y por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca aportados por la parte demandante.

2.- Sí es factible llamar a la parte demandante, Irma Lórena Mendoza Duran, a rendir declaración de parte.

5.3 Tesis del despacho

El Despacho confirmará la decisión de primera instancia, en atención a que teniendo en cuenta lo previsto en el inciso 2º del artículo 226 del CGP, sobre un mismo hecho sólo se puede decretar la práctica de un dictamen pericial y, por otra parte, la declaración de parte no es necesaria para demostrar los hechos de la demanda.

5.4 Generalidades de la prueba

Para establecer la pertinencia, conducencia y procedencia de las pruebas solicitadas, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 167, 168 y 169 del CGP, los cuales son del siguiente tenor:



Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
“(…)”

Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconclucentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Artículo 169. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. “(…)”.

El Consejo de Estado (2019)¹ definió el concepto de pertinencia, contundencia, utilidad y licitud en los siguientes términos:

“Atendiendo a que, conforme con el criterio jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en las providencias citadas supra, para analizar si una prueba es legalmente prohibida o ineficaz, o si versa sobre hechos notoriamente impertinentes o es manifiestamente superflua, se debe verificar si cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud.

*Conforme a la jurisprudencia señalada supra, se considera que para verificar: i) la **pertinencia** de una prueba se debe revisar que el hecho que se pretende probar guarde relación con el objeto del proceso; ii) la **conducencia** de una prueba se debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar²; iii) la **utilidad** de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba³; y iv) la **licitud** de la prueba se debe revisar que no haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales⁴.”.*

Ahora bien, el artículo 212 del CPACA manifiesta que las pruebas pueden ser apreciadas por el juzgador, cuando son solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso dentro del término y oportunidad señalados. De manera textual dispone:

“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este código.

¹ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de diciembre de 2019, radicación nro. 11001-03-24-000-2011-00056-00.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia de 11 de abril de 2018. M.P. Eugenio Fernández Carlier, número único de radicación 43533. “[...]en la jurisprudencia se ha distinguido desde hace tiempo entre prueba ilegal y prueba ilícita, división con la que se alude, en el primer caso, a aquellas que padecen yerros en las formas propias de ordenación, práctica y/o incorporación a la actuación (debido proceso probatorio), y en el segundo, a aquellas obtenidas, en general, con desconocimiento de las garantías fundamentales de las personas, por ejemplo, por violación de los derechos a la no autoincriminación, a la solidaridad íntima, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. [...]”.



Radicación : 76001-33-33-003-2018-0121-01
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Demandante : JOHANNA MELGAREJO CASTILLO Y OTROS
Demandado : NACIÓN – MINJUSTICIA - INPEC COJAM JAMUNDÍ

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas...”.

El Consejo de Estado (2019)⁵ recalcó, que el precitado artículo prevé las oportunidades en que las pruebas deben ser aportadas o solicitadas, así:

“Asimismo, el artículo 212 del CPACA, prevé que las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas en primera instancia corresponden a: la presentación de la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, según el caso concreto.”.

5.5 Caso Concreto

De conformidad con el artículo 320⁶ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁷ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

A su turno, el artículo 328 ibídem dispone entre otros aspectos que: *“el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.*

Del tenor literal de la norma en cita, concluye el Despacho que la voluntad del legislador es que, en virtud del recurso de apelación el superior estudie y revise la decisión proferida por el *a quo*, pero con una característica especial, y es que dicha instancia se limita a aquellos precisos cargos expuestos por el recurrente al sustentar su inconformidad, los cuales, se encuentran limitados, en virtud de la congruencia, a lo decidido por el juez en primera instancia.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali en el transcurso de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, profirió el auto No. 975 del 09 de

⁵ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de noviembre de 2019, Radicación número: 25000-23-37-000-2016-02035-01.

⁶ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

⁷ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



septiembre de 2019 a través del cual: 1) negó el dictamen pericial solicitado por el apoderado judicial de la parte demandante de remitir al señor Signey Monroy Castillo, a la junta de Calificación de invalidez y 2) negó el testimonio de parte de la señora Irma Lorena Mendoza.

Contra dicha decisión, el apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación y reitero la importancia de dichas pruebas, argumentando: 1) frente al dictamen pericial, argumentó que la pérdida de la capacidad laboral del señor Signey Monroy Castillo aumentó en un 41% por presentar nuevas patologías, lo que se evidencia en un nuevo dictamen elaborado por la Junta de Calificación que trajo de presente a la diligencia y 2) consideró que el testimonio de la señora Irma Lorena Mendoza es muy importante ya que conoció el proceso médico del afectado.

Para resolver el presente asunto, el despacho encuentra:

1) Dictamen pericial

En el escrito de la demanda, el apoderado judicial solicitó tener como pruebas los siguientes documentos: Dictamen pericial realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca⁸.

Igualmente, solicitó se efectuara un peritaje al señor Signey Monroy Castillo ante la Junta Regional de Invalidez, ya que a la fecha su salud ha desmejorado⁹.

El Juzgado Trece Administrativo Oral de Cali incorporó y dio trámite, en virtud del artículo 220 del CAPCA, a los dictámenes periciales elaborados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense y por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca aportados por la parte demandante y dio traslado de los mismos a las otras partes.

Al respecto, el inciso segundo del artículo 226 del CGP dispone:

“Artículo 226. La Prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos y artísticos. Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal sólo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.

“...

Visto lo anterior, encuentra el Despacho que lo que busca el apoderado judicial de la parte demandante es demostrar la pérdida de la capacidad laboral del señor Signey Monroy Castillo, hecho que puede ser demostrado con un dictamen pericial que, como se vio, fue decretado por el Juzgado Tercero

⁸ Ver folios 170 al 181 del expediente y 225 al 227 del expediente.

⁹ Ver folio 34

Radicación : 76001-33-33-003-2018-0121-01
 Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
 Demandante : JOHANNA MELGAREJO CASTILLO Y OTROS
 Demandado : NACIÓN – MINJUSTICIA - INPEC COJAM JAMUNDÍ



7

Administrativo Oral de Cali en el transcurso de la audiencia inicial, por tal razón, el nuevo dictamen solicitado no pudo ser tenido en cuenta en virtud a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del CGP, ya que su finalidad es demostrar igualmente la pérdida de la capacidad laboral del afectado.

Ahora bien, frente al documento que allegó el apoderado judicial de la parte demandante en el transcurso de la audiencia, el cual contiene un nuevo dictamen pericial elaborado por la Junta de Calificación de Invalidez, el Despacho considera que no puede ser incorporado al proceso, ya que el artículo 212 del CPACA relaciona de manera taxativa las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas que son: con la reforma de la demanda y su respuesta, con la demanda de reconvención y su contestación, con las excepciones y la oposición a las mismas, por tanto, la audiencia inicial regulada en el artículo 180 del CPACA, no es la etapa procesal idónea para allegar nuevas piezas procesales, pues en dicho momento el juez debe decretar como pruebas las oportunamente allegadas o solicitadas por las partes en los términos indicados en el CPACA.

El artículo 212 del CPACA de manera textual dispone:

“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas... (Subrayado fuera del texto).

El Consejo de Estado (2019)¹⁰ recalcó que el precitado artículo prevé las oportunidades en que las pruebas deben ser aportadas o solicitadas, así:

“Asimismo, el artículo 212¹¹ del CPACA, prevé que las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas en primera instancia corresponden a: la presentación de la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, según el caso concreto”.

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de noviembre de 2019, Radicación número: 25000-23-37-000-2016-02035-01.

¹¹ “Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas”.



2) Testimonio de la demandante Irma Lorena Mendoza

Para iniciar, resulta pertinente traer a colación lo previsto en el artículo 198 del Código General del Proceso - CGP¹², norma que sobre el interrogatorio de parte prevé:

"[...] ARTÍCULO 198. INTERROGATORIO DE LAS PARTES. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso.

Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio [...]" (Destacado del Despacho).

Frente al interrogatorio de parte, el Consejo de Estado¹³ ha manifestado lo siguiente:

"La prueba de declaración de parte se encuentra regulada en el Código General del Proceso en los artículos 191 a 205. De acuerdo con lo precisado por esta Corporación¹⁴, "[...] el interrogatorio de parte es un medio probatorio que reviste una especial connotación en el curso de un proceso, en la medida en que es una prueba que se origina en la declaración de una de las partes, sobre hechos que interesan al proceso. Esta declaración, tiene origen en la respuesta a una serie de preguntas formuladas por la parte interesada en llevar a cabo el medio probatorio, erigiéndose éste en una forma de provocar la confesión".

La doctrina nacional ha señalado igualmente que "Este medio de prueba tiene como finalidad permitir que las partes, es decir, quienes se hallan ubicados como demandantes o demandados o quienes tienen la calidad de otras partes y excepcionalmente, en casos taxativamente señalados por la ley, otros sujetos de derecho distintos de los anteriores que estén habilitados para rendir esta clase de interrogatorio, presenten su versión acerca de hechos que interesan al proceso con la posibilidad especial de que si se dan los requisitos que la ley prescribe, de su versión se estructure una confesión."¹⁵

El artículo 198 del C.G.P. prevé sobre este medio de prueba, lo siguiente:

"Artículo 198. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso.

Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio.

¹² "Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo".

¹³ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de junio de 2019, radicado nro. 11001-03-24-000-2007-00323-00.

¹⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Auto de 10 de julio de 2013. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00957-01(46314).

¹⁵ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Pruebas. Dupre Editores Ltda. Bogotá. 2017. Páginas 175 y 176.

Radicación : 76001-33-33-003-2018-0121-01
 Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
 Demandante : JOHANNA MELGAREJO CASTILLO Y OTROS
 Demandado : NACIÓN - MINJUSTICIA - INPEC COJAM JAMUNDÍ



9

Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente. (Subraya fuera de texto)

En el contexto anterior, se advierte que el interrogatorio de parte es un medio de prueba que se dirige a quien ocupa en el proceso la calidad de parte, bien sea que se trate de una persona natural o de una persona jurídica. En este último caso, quien debe rendir el interrogatorio es la persona natural que ostente la representación legal de la misma; no obstante, la prueba se decreta en relación con la persona jurídica, parte en el proceso, y no con la persona natural, quien solo actúa como su representante para estos efectos procesales”.

Sobre las modificaciones que introdujo el CGP al interrogatorio de parte, el Consejo de Estado¹⁶ efectuó una distinción y concluyó que a la fecha no existe una postura unificada al respecto, por lo que la aplicación normativa de la declaración de parte está determinada por la interpretación razonable que los jueces hagan en el caso concreto a partir de los elementos del mismo. Al respecto arguyó:

*“El artículo 191 CGP, adicionó a los requisitos de la confesión que contenía el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el siguiente inciso:
 “La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”*

Por su parte, el artículo 198 del CGP¹⁷ dispone que, a petición de parte o de oficio, el juez podrá citar a las partes para interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso, mientras el artículo 203¹⁸ del CPC, preveía que cualquier parte podía pedir la citación de la parte contraria para el mismo fin.

Entonces, las modificaciones que introdujo el CGP, conducen, efectivamente, a que se abran nuevas vías interpretativas sobre la declaración de parte y la confesión que no encuentran una postura pacífica. De ello da cuenta la doctrina, que plantea una clara escisión entre la declaración de parte y la confesión, al no condicionarla a que la contraparte la haya pedido, o a que sea decretada por el juez de oficio. Posición opuesta al desarrollo que se hizo durante muchos años de las normas del CPC sobre la materia, que sostenía que, debido a que la declaración de parte tenía la finalidad de buscar la confesión, no era posible que la misma declarante la pidiera.

Incluso, es preciso indicar que, hasta el momento, esta discusión no ha sido desatada a nivel jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, por lo que la aplicación normativa de la declaración de parte está determinada por la interpretación razonable que los

¹⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2019, radicado nro. 11001-03-15-000-2019-03546-00(AC)

¹⁷ “ARTÍCULO 198. INTERROGATORIO DE LAS PARTES. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. [...]”

¹⁸ Artículo 203. Interrogatorio a instancia de parte. Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. En la segunda instancia el interrogatorio sólo podrá pedirse en los casos señalados en el artículo 361.



jueces hagan en el caso concreto a partir de los elementos del mismo. En especial a partir del escenario fáctico que exija determinados medios de prueba".

En el presente asunto, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó en el numeral 3 del acápite "PRUEBAS PEDIDAS"¹⁹, que se escuche en declaración de parte a la señora Irma Lorena que ostenta la calidad de compañera permanente de la víctima, para que declare sobre la unión marital.

Sobre el asunto objeto de autos, se considera que con la entrada en vigencia del CGP, en algunas decisiones judiciales y en la doctrina nacional se ha considerado que los artículos 191 y 198 del CGP introdujeron una reforma al régimen probatorio que permite la declaración de parte como medio probatorio autónomo que faculta a los apoderados para obtener la declaración de su representado.

Además, no se encuentra necesario decretar esta prueba, pues con las demás pruebas del proceso y las manifestaciones contenidas en la demanda ordinaria es suficiente para determinar la unión marital que tiene la señora Irma Lorena Mendoza Duran.

Expuestos los anteriores argumentos, el Despacho confirmará el auto No. 975 del 09 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali.


En consecuencia, se;

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 975 del 09 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. - En firme la presente decisión, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


OMAR EDGAR BORJA SOTO
Magistrado

1-00124-1100020271002

¹⁹ Folio 34
VoBo Secretario
Proyectó Andrés M.